



Dividida y desorientada, la izquierda guatemalteca lucha por sobrevivir

Carlos Arrazola

Periodista

La izquierda política en Guatemala ha tenido una trayectoria histórica marcada por la represión, exclusión y fragmentación. Desde la Revolución de 1944 hasta el conflicto armado interno que duró 36 años, pasando por el golpe de Estado de 1954 y los Acuerdos de Paz de 1996, la izquierda ha enfrentado diversos desafíos para consolidarse como una fuerza política capaz de representar los intereses y demandas de los sectores populares y marginados del país.

Los partidos políticos de izquierda han tenido una presencia minoritaria y fluctuante en el escenario electoral guatemalteco. Según la Ley Electoral y de Partidos Políticos, actualmente existen 27 partidos vigentes en el país, de los cuales solo tres se identifican abiertamente con la izquierda: la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), el Movimiento Político Winaq y el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP). Estos tres surgieron de la transformación de las antiguas guerrillas que firmaron los Acuerdos de Paz con el Estado y que buscaron integrarse a la vida política institucional. Algunos otros partidos minoritarios han desaparecido por falta de votos en los resultados electorales. Actualmente existe también el Movimiento Semilla, que se autodefine como socialdemócrata y que desde su creación en 2019 ha guardado distancia de las

otras expresiones progresistas para no ahuyentar a sus votantes, mayormente conservadores.

Los partidos de izquierda han tenido dificultades para obtener una representación significativa en el Congreso de la República, así como para articular una propuesta política alternativa al modelo neoliberal dominante y a la captura de las instituciones estratégicas del Estado, cooptadas abiertamente a partir de 2017 por una alianza de políticos de extrema derecha, empresarios, antiguos militares y grupos del crimen organizado, en lo que popularmente se conoce como “pacto de corruptos”. En las elecciones de 2015, apenas obtuvieron 5 escaños de los 158 posibles: 2 de URNG –que corrió en Alianza con Winaq– y 3 del desaparecido Convergencia. En los comicios de 2019 los partidos de izquierda lograron sólo 8 de los 160 escaños en disputa: 4 de Winaq, 3 de URNG y 1 del MLP. El Movimiento Semilla, que participó en ese año por primera vez, se hizo de 7 importantísimas curules.

Los resultados en la competición por la Presidencia también han sido adversos para la izquierda. En 2015, el candidato de la coalición URNG-Winaq, Miguel Ángel Sandoval, se ubicó en la décimo primera posición de 14 participantes, con apenas el voto del 2,11% de los electores. Cuatro años después,

en 2019, la líder indígena del MLP, Thelma Cabrera, dio la sorpresa al posicionarse en el cuarto lugar con el apoyo del 10,37 % de los electores. Ese mismo año, el académico Manuel Villacorta, de Winaq, se ubicó en el quinto puesto con el 5,22%. El candidato de la URNG, Pablo Ceto, obtuvo el 2,16% y el de Convergencia, Benito Morales, el 0,86 %.

Muchos son los factores políticos, ideológicos, históricos y sociológicos que explican la debilidad de los partidos de izquierda en Guatemala, pero los más destacables en la coyuntura actual se pueden resumir en: la falta de unidad y coherencia interna; la escasa renovación de sus cuadros dirigentes; el debilitamiento de sus bases sociales; la estigmatización y criminalización por parte de los sectores conservadores y autoritarios; la competencia con otros actores políticos que se presentan como progresistas o de centro; la incapacidad para gestionar recursos técnicos y financieros que les permitan realizar actividades organizativas y de propaganda; y la carencia de estrategias de comunicación política adecuada.

“LA VANGUARDIA SOY YO”

El principal obstáculo histórico de la izquierda guatemalteca para lograr la unidad ha sido el mesianismo: todos los grupos, partidos y facciones surgen a partir de la idea de que cada uno es la vanguardia alrededor de la cual los demás deben unificarse.

“Todos creen ser los dueños de la verdad, los únicos capaces de dirigir y mandar. Y en esa lógica todos fallan, porque nadie quiere ser mandado —comenta María, ex militante de la URNG, 48 años, en una entrevista reciente—. Ese vicio se ha reproducido desde siempre, y hasta que no lo entendamos, hasta que no aceptemos que la solución debe basarse en la discusión con argumentos y que las decisiones deben tomarse en consenso, con disciplina y basadas en un programa, nunca lograremos nada.”

La fragmentación de los partidos de izquierda, las diferencias ideológicas, pero principalmente el sectarismo y el mesianismo, han dificultado la formación de coaliciones sólidas. La diversidad de enfoques ideológicos y estrategias políticas dificulta la formación de alianzas firmes. Para superar este desafío, sería necesario que los partidos de izquierda establecieran un diálogo abierto y constructivo en el que puedan identificar puntos en común y desarrollar

una plataforma única basada en valores compartidos, lo que implicaría renunciar a protagonismos particulares.

Por otro lado, para fortalecer la capacidad organizativa de los partidos, tanto a nivel interno como en sus vínculos con la sociedad civil, es necesario mejorar la formación política de sus miembros, promover la participación de la juventud y las mujeres, así como fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en todas las instancias del partido. Además sería importante depurar de sus filas a los dirigentes que han sido permeados por las prácticas corruptas del sistema y que han contaminado tanto las estructuras dirigenciales como las bases.

Otro desafío importante es la construcción de alianzas entre los partidos de izquierda y el movimiento social. Aunque ambos actores comparten preocupaciones comunes en torno a la corrupción y desigualdad, a menudo han tenido dificultades para colaborar de manera efectiva. Para superar esta brecha, es fundamental establecer espacios de encuentro donde puedan generarse diálogos entre partidos y organizaciones sociales.

La confianza mutua y la creación de agendas compartidas son elementos clave para el fortalecimiento de estas alianzas. Para lograrlo, los partidos deben hacer un esfuerzo por demostrar su compromiso con las demandas y aspiraciones del movimiento social. A su vez, las organizaciones sociales deben reconocer el papel de los partidos como instrumentos políticos y buscar puntos de convergencia. La construcción de alianzas basadas en la confianza y el respeto mutuo permitiría una lucha más efectiva contra la corrupción, así como la consolidación de un frente unido ante la derecha.

Para que esto sea posible se necesita convencer y empatizar con la juventud. Según el Censo Nacional de Población de 2018, más del 60% de la población guatemalteca es menor de 30 años. Ello implica que la mayoría nació después del conflicto armado interno, durante el inicio y consolidación de las políticas económicas neoliberales y, fundamentalmente, en la consolidación de las tecnologías de la comunicación y la información. Los centennials, como se les denomina a las personas nacidas a partir de 1995, independientemente de sus condiciones socioeconómicas son “nativos digitales”, es decir, el

ARRAZOLA: IZQUIERDA DIVIDIDA Y DESORIENTADA

internet y sus derivados forman parte de sus vidas, principalmente en los ámbitos de la comunicación y la educación.

La influencia de valores conservadores en la juventud se manifiesta a través de tres principales canales: la religión, la educación y las redes sociales. La religión, como práctica realizada por instituciones antiguas, a menudo promueve valores tradicionales y conservadores que pueden chocar con la visión progresista de los partidos de izquierda, principalmente las sectas evangélicas neopentecostales que se han expandido por todo el país de manera exponencial con el discurso de la prosperidad. La educación también es un factor determinante, ya que algunos sistemas educativos transmiten valores conservadores y perpetúan discursos dominantes. Además, las redes sociales desempeñan un papel importante en la formación de opiniones y actitudes, pudiendo exponer a los jóvenes a mensajes conservadores y polarizados.

El gran desafío de los partidos de izquierda, entonces, es captar la atención y empatía de los jóvenes frente a la poderosa influencia de los valores conservadores. Para ello es fundamental que los partidos conozcan y comprendan las características generacionales y que sean capaces de escuchar, así como de comprender las preocupaciones y aspiraciones de la juventud. Esto implica abrir espacios de diálogo, participar en debates y estar dispuestos a adaptar sus propuestas políticas en función de las necesidades de dicha generación.

En consecuencia, los partidos deberían presentar propuestas políticas concretas y realistas que aborden las preocupaciones de los jóvenes, enfocándose en temas relevantes para esta generación, como la educación de calidad, el empleo, la vivienda asequible, la igualdad de género, la justicia social, la protección del medio ambiente y la diversidad sexual. Estas propuestas deben ser articuladas de manera clara y accesible, presentando soluciones prácticas y factibles. Para lograrlo, la comunicación es un elemento estratégico.

Los partidos deberían desarrollar narrativas inclusivas y empáticas que conecten emocionalmente con los jóvenes. Esto implica comunicar de manera efectiva los valores de justicia social, igualdad, diversidad y solidaridad, resaltando cómo estas

ideas pueden mejorar la vida de los jóvenes y de toda la sociedad. Es importante utilizar un lenguaje claro y accesible, evitando tecnicismos políticos y enfocándose en historias y experiencias reales que reflejen tanto los desafíos como las aspiraciones de la juventud.

Además es importante que dichas estrategias comunicativas se utilicen en los espacios habitados mayormente por jóvenes, tanto físicamente como en línea. Esto implica la participación activa de los partidos en eventos juveniles, festivales culturales, manifestaciones estudiantiles y otras actividades importantes para esta generación. Asimismo, es necesario desarrollar capacidades para el uso de redes sociales y otras plataformas digitales con el objetivo de difundir mensajes políticos, promover el diálogo y generar espacios de participación e interacción con los jóvenes en un ambiente de respeto y apertura.

Pero, fundamentalmente, es necesario conocer las necesidades más sentidas de los jóvenes y comunicarse a través de sus mismos códigos y canales, evitando la superioridad etaria y el adultocentrismo, así como renunciado a las posiciones ortodoxas y conservadoras para promover la formación política y la discusión sobre la realidad nacional. En ese sentido, para los partidos es importante fomentar el pensamiento crítico, la pluralidad de ideas y la participación, a través de la generación de espacios de toma de decisiones dentro de sus propias estructuras y procesos políticos. Reconocer la voz y valorar los aportes de los jóvenes permitirá una participación mayor de estos en la elaboración de agendas, la formulación de políticas y la toma de decisiones.

La creación de narrativas incluyentes y empáticas en espacios relevantes, la promoción del pensamiento crítico y la generación de espacios de participación y toma de decisiones, permitirían a los partidos de izquierda conectar de manera efectiva con los jóvenes para construir un puente hacia su participación activa y comprometida en la lucha por la justicia social, la transformación política y la derrota del "pacto de corruptos".

LA AGONÍA DEL MOVIMIENTO SOCIAL

Las organizaciones del movimiento social, aliadas naturales de los partidos políticos de izquierda, también han sufrido un debilitamiento hasta el punto de casi desaparecer. Algunas de ellas han desarrollado

diversas formas de acción colectiva para expresar su descontento por la cooptación del Estado por parte del “pacto de corruptos” y por la reivindicación de sus demandas, en resistencia al sistema político-económico excluyente y opresor. Sin embargo, de 2017 a la fecha han disminuido las movilizaciones callejeras, las marchas, plantones, consultas comunitarias, denuncias públicas y las alianzas estratégicas de carácter popular.

Los grupos que se han manifestado han sido víctimas de represión policial, amenazas y criminalización judicial. Esta situación ha obligado a que, en los últimos dos años, decenas de líderes sociales, activistas humanitarios, directivos de organizaciones no gubernamentales, periodistas, jueces y fiscales, entre otros, hayan abandonado el país ante el temor de ser víctimas de procesos penales creados ad hoc por parte del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia para neutralizar cualquier tipo de protesta o crítica en contra del statu quo y cobrar venganza en contra de quienes dirigieron, participaron y apoyaron la lucha en contra de la corrupción e impunidad impulsada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el ente de las Naciones Unidas creado en 2006 a petición del Estado guatemalteco para ese mismo fin.

Los sindicatos de maestros y de salubristas, los más grandes y poderosos del país, han reducido sus luchas a intereses económicos gremiales. Para lograr sus objetivos sus dirigentes se han aliado con los Gobiernos en turno en un acuerdo tácito de “si me das lo que pido, te apoyo cuando lo necesites.” El resto de los sindicatos de trabajadores del Estado son débiles e incapaces de movilizar a sus miembros. Los del sector privado son casi inexistentes.

El movimiento estudiantil de educación media ha desaparecido en su totalidad. La Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) de la estatal Universidad Nacional de San Carlos de Guatemala (USAC), no encuentra condiciones para recomponerse. La AEU permaneció en manos de grupos vinculados con la corrupción interna de dicha casa de estudios, así como de grupos del crimen organizado, durante casi dos décadas después de la firma de los Acuerdos de Paz. La dirigencia fue recuperada en 2017, en medio de la efervescencia social por la lucha contra la corrupción. Sin embargo, los nuevos líderes no han logrado articular un movimiento estudiantil fuerte y representativo. Aunque la rectoría de esa univer-

sidad ha mantenido vínculos históricos con los Gobiernos en turno, en 2022, Walter Mazariegos, un personaje oscuro, operador del “pacto de corruptos”, se apoderó de la Rectoría de la USAC por medio de un descarado fraude electoral, sin que los pocos estudiantes que se declararon en resistencia pudieran evitarlo.

El movimiento indígena y campesino también enfrenta desafíos considerables en la consecución de sus reivindicaciones históricas, como consecuencia de la represión que continúan ejerciendo los ejércitos privados de los grandes terratenientes en contra de líderes, así como del alarmante incremento de la pobreza en zonas rurales, principalmente en las zonas del norte y noroccidente del país. El acceso a la tierra y la propiedad colectiva, la restitución de tierras ancestrales, así como el reconocimiento y defensa de sus derechos políticos, económicos y culturales, continúan siendo las principales luchas de las organizaciones indígenas y campesinas. Pero a partir de las políticas neoliberales implementadas en la década de 1990 debieron asumir también, incluso con más ahínco, la defensa y la protección de sus territorios frente a la expansión de proyectos extractivos y agroindustriales.

Igual que el resto de las organizaciones del movimiento social guatemalteco, que iniciaron un proceso de debilitamiento a partir de la firma de los Acuerdos de Paz de 1996, los indígenas y campesinos también se debilitaron a nivel nacional, mas no a nivel local. Mantienen internamente las estructuras de liderazgo enfocadas en la resolución de sus problemas del día a día y están poco o nada vinculados con las luchas nacionales.

Diversas comunidades han tenido éxitos parciales en los procesos de consulta y consentimiento previo, libre e informado, para la instalación en o cerca de sus comunidades de proyectos de explotación minera, agroindustrial o de generación de energía, que afectan sus territorios y recursos naturales.

Aunque aún hay agrupaciones que mantienen el nombre de organizaciones históricas, estas no son más que reducidos grupos que buscan captar fondos para sobrevivir, con la promesa de revitalizarlas.

El movimiento indígena y campesino también ha experimentado fragmentación y divisiones internas debido a diferencias políticas, ideológicas, culturales

ARRAZOLA: IZQUIERDA DIVIDIDA Y DESORIENTADA

y estratégicas que han debilitado su capacidad de acción colectiva y dificultado la formulación de demandas unificadas.

La única organización indígena y campesina que ha logrado sobrevivir y reinventarse es el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), el cual mantiene una membresía amplia a nivel nacional, principalmente en las regiones del oriente, centro y parte del norte, gracias a una denuncia puntual de carácter económico: el alto costo de la energía eléctrica en las zonas rurales.

CODECA, que inicialmente fue integrada por líderes comunitarios vinculados con la antigua guerrilla, ha logrado renovar sus cuadros dirigenciales y ha desarrollado dos vertientes para alcanzar sus objetivos: la gremial, que impulsa la lucha reivindicativa por el buen vivir de los pueblos originarios basándose en un proceso constituyente popular y plurinacional y, la política, el instrumento electoral denominado Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) por medio del cual buscan acceder al poder a través de las urnas.

En los últimos cinco años, CODECA ha realizado decenas de nutridas movilizaciones y bloqueos a nivel nacional en contra del "pacto de corruptos". Sin embargo, durante el mismo lapso al menos 27 de sus líderes y activistas han sido asesinados en diferentes puntos del país sin que ninguno de estos hechos haya sido esclarecido por las autoridades.

El Consejo de los 48 Cantones de Totonicapán, la organización de autoridades indígenas más antigua del país, también ha realizado fuertes movilizaciones en contra del alto costo de la vida y en exigencia de reformas al Estado. Sus estatutos y naturaleza le impiden a los 48 Cantones asumir posiciones ideológicas y partidarias.

Sin embargo, en este panorama también han surgido algunos oasis pequeños pero significativos en medio de la sequía y el agotamiento, mayoritariamente abanderados por grupos de jóvenes provenientes de clases medias. Estas nuevas expresiones de resistencia social provienen de diversas vertientes de los feminismos, ambientalistas y de la comunidad LGBTQ+. Aunque en la agenda de reivindicaciones estos grupos coinciden en la lucha contra la corrupción y la impunidad, en favor de la democracia y los derechos humanos, cada uno busca objetivos

particulares, algunas veces contrapuestos con los intereses de las grandes mayorías.

Una de las principales quejas de las organizaciones indígenas y campesinas es precisamente la falta de apoyo y empatía de las organizaciones urbanas (de todo tipo) ante las necesidades y exigencias de las zonas rurales. En redes sociales se viraliza con facilidad la narrativa en contra de las protestas campesinas, promovida por los medios de comunicación tradicionales y las cámaras empresariales, cuando hay manifestaciones masivas o tomas de carreteras. Además, contadas veces se condena la situación de pobreza y hambre en que viven las comunidades indígenas o los continuos actos de represión en contra de líderes y activistas.

EL "PACTO DE CORRUPTOS", EL ENEMIGO A VENCER

La consolidación y persistencia de la corrupción y la impunidad han sido un obstáculo significativo para el desarrollo socioeconómico y político de Guatemala. Las élites depredadoras (políticas, empresariales, militares, religiosas y criminales), amenazadas por la significativa lucha emprendida durante la década pasada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y amplios sectores sociales, establecieron el denominado "pacto de corruptos". Este acuerdo encubierto, aderezado con una narrativa que exagera los valores conservadores, tiene como objetivo mantener el statu quo, obstaculizar los avances en la lucha contra la corrupción y asegurar la impunidad para los involucrados. Para ello han destruido los logros de décadas de lucha en favor de la democracia, arrebatando derechos fundamentales a la población e infundiendo miedo, lo que genera inmovilidad social.

En cinco años, el "pacto de corruptos" implementó lo que los expertos denominan la "reconfiguración cooptada del Estado", la fase culmen del proceso de captura del Estado en la que los actores, legales o ilegales, obtienen beneficios de carácter económico, penal y de legitimación social, por medio de alianzas políticas para tener el control absoluto de las instituciones estatales estratégicas. Con ello, mediante prácticas legales o ilegales, pero ilegítimas, desde dentro del régimen estos agentes influyen en la formulación, modificación, interpretación y aplicación de las reglas del juego social y de las políticas públicas, con el fin de obtener beneficios de largo plazo y asegurar que sus intereses sean

válidos política y legalmente. Es decir, se trata de un régimen que promueve la corrupción y garantiza la impunidad para beneficio de quienes ostentan el poder, por medio del control absoluto de todas las instituciones del Estado. Ello implica, como se observa en otros países de tendencia dictatorial, la persecución en contra de críticos y funcionarios probos por medio de la criminalización, la eliminación “legal” de los opositores políticos y el cierre o control de los medios de comunicación independientes, entre otras medidas.

El “pacto de corruptos” se consolidó en 2017 como consecuencia de la convergencia de intereses de las fuerzas políticas de derecha, el sector empresarial, expresiones del crimen organizado y las organizaciones conservadoras que comparten una visión similar y buscan mantener el control del poder, para detener la lucha contra la corrupción encabezada por la CI-CIG, que les perjudicaba directamente al amenazar sus privilegios y beneficios económicos.

El sector empresarial, en su afán de proteger sus intereses económicos a través de aportes financieros a campañas políticas para partidos y candidatos de derecha, busca influir en la toma de decisiones para seguir impune.

La convivencia entre políticos corruptos y el crimen organizado ha permitido la impunidad y la protección de actividades ilícitas, desde el narcotráfico hasta el lavado de dinero. De manera natural, los grupos del crimen organizado han encontrado en este pacto una oportunidad para mantener sus operaciones libres de interferencias.

A través del “pacto de corruptos” se han erosionado las instituciones encargadas de prevenir y perseguir la corrupción. La designación de funcionarios corruptos en puestos clave, la interferencia en el sistema judicial y la obstrucción de investigaciones han debilitado los mecanismos de rendición de cuentas así como la independencia de poderes. Además, sistemáticamente se ha bloqueado cualquier intento de implementar reformas efectivas anticorrupción.

Detener el avance y consolidación del “pacto de corruptos” es hoy el objetivo estratégico de los partidos políticos de izquierda en Guatemala –casi los únicos que no forman parte de dicha alianza– y del movimiento social, espacio de lucha genuino de diversos sectores sociales del país.

Sin embargo, en el futuro inmediato no existen condiciones objetivas para evitar su avance. Las elecciones generales de junio, en las que se elegirán nuevas autoridades políticas a nivel nacional, amenazan cualquier posibilidad democrática al ser organizadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), institución estratégica del sistema democrático cooptada por el “pacto de corruptos”.

Los candidatos y partidos incómodos para la alianza han sido vedados de participar con decisiones arbitrarias disfrazadas de legalismos. El exprocurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, es la última piedra en el zapato del “pacto”. Se presentó como candidato a la Vicepresidencia por el MLP y fue rechazado por una denuncia espuria presentada en su contra ante el Ministerio Público. Con ello quedó fuera de la contienda Thelma Cabrera, candidata presidencial de esa agrupación, que en 2019 obtuvo el cuarto lugar de la preferencia electoral.

También fueron eliminados con acciones similares, entre otros, Roberto Arzú, hijo del expresidente Álvaro Arzú, quien corría con el partido derechista Podemos y en las encuestas de febrero estaba ubicado dentro de los tres favoritos; Juan Francisco Solórzano, quien unió en coalición por la alcaldía de la Ciudad de Guatemala a URNG, Winaq y Semilla, y de acuerdo a las encuestas tenía posibilidad de ganar; y Aldo Dávila, un diputado opositor abierto, crítico del presidente Alejandro Giammattei, quien buscaba su reelección con el partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), de centro-izquierda.

La decisión de sacar de la papeleta, a menos de 40 días de las elecciones, al candidato del partido derechista Prosperidad Ciudadana (PC), el empresario agroindustrial Carlos Pineda, es quizá la acción más osada del “pacto de corruptos” y la que mayor rechazo ha generado entre la población. Pineda, quien participaría por primera vez en una elección, se había ganado la simpatía de diversos grupos gracias a su adecuada estrategia de redes sociales, lo que le valió pasar del sótano a la cabeza de las encuestas en menos de tres meses. La posibilidad de que Pineda ganara las elecciones alertó a los operadores del “pacto”, quienes iniciaron acciones “legales” espurias para cancelar su candidatura.

La continuidad del “pacto de corruptos” sin mayores obstáculos depende, en el siguiente orden de impor-

ARRAZOLA: IZQUIERDA DIVIDIDA Y DESORIENTADA

tancia, de los triunfos de Manuel Conde, candidato del oficialista partido Vamos, quien a pesar de la millonaria campaña a su favor y del apoyo de las estructuras del Gobierno no ha logrado crecer; de Zury Ríos de la coalición de los ultraderechistas partidos Valor y Unionista, quien en las encuestas ha bajado de la segunda a la tercera posición primero y luego a la cuarta posición; y de Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien se ha mantenido segunda en la preferencia electoral según las encuestas.

Las posibilidades objetivas de los candidatos de los partidos de izquierda y progresistas de ganar las elecciones son mínimas. Manuel Villacorta del partido VOS, tiene cerca del 5% de intención de voto; Amílcar Pop de la coalición URNG-Winaq, 1.6%; y Bernardo Arévalo de Semilla, 0.7%. Las posibilidades de ganar espacios en el Congreso son muy similares. Los pronósticos más conservadores de los mismos partidos prevén entre doce y quince escaños, de los 160 que integran todo el Parlamento.

En ese contexto, el escenario más catastrófico para la izquierda y la sociedad en general sería el triunfo de Zury Ríos y una mayoría de más 81 diputados en el Congreso de los candidatos del “pacto de corruptos”. Un escenario igual de adverso, pero con mayores posibilidades de mantener espacios para la oposición, sería el triunfo de Sandra Torres y un Congreso con mayoría de diputados de la alianza, pero fragmentado y con mayor representación progresista. Y el más realista de los escenarios sería el triunfo del derechista Edmond Mulet del partido Cabal, quien podría capitalizar los votos de Carlos Pineda, y un Congreso fragmentado aunque con mayoría de los partidos de derecha.

ACCIONES MÍNIMAS PARA ENFRENTAR A LA DERECHA CORRUPTA

Para enfrentar de manera efectiva al “pacto de corruptos” es necesario que los partidos de izquierda y el movimiento social busquen superar sus intereses particulares, identificar liderazgos nacionales que faciliten los procesos de unidad y elaborar propuestas políticas claras y convincentes que aborden las demandas de justicia social y la lucha contra la corrupción. Esto implica articular una visión coherente y realista para el país, así como comunicarla de manera efectiva a la ciudadanía.

La premisa es clara: en Guatemala los partidos y movimientos progresistas, con escasa presencia a nivel nacional, con bases reducidas, sin recursos financieros y en solitario, no dejarán de ser una minoría insignificante. Sólo mediante la unión y colaboración los partidos de izquierda podrán generar un cambio significativo en Guatemala para construir un futuro más justo y equitativo.

Para ello son fundamentales la madurez y el compromiso político e ideológico, de manera que se logren impulsar estas cinco acciones estratégicas en el corto y mediano plazo:

1. Diálogo y unidad interna

Los partidos de izquierda deberían fomentar un diálogo constructivo y respetuoso entre sus miembros, promoviendo la convergencia en torno a valores y objetivos comunes. Esto implica superar diferencias ideológicas y enfocarse en la construcción de una plataforma política unificada que refleje las preocupaciones y aspiraciones de la izquierda en Guatemala.

2. Coordinación y trabajo conjunto

Establecer mecanismos de coordinación efectivos para unificar programas, estrategias y acciones políticas. Creación de instancias de encuentro y colaboración regular donde se discutan estrategias de crecimiento, agendas legislativas y acciones conjuntas para enfrentar la corrupción y promover la justicia social.

3. Participación ciudadana y empoderamiento

Fortalecer su relación con el movimiento social y las organizaciones de la sociedad civil. Establecer espacios de participación ciudadana en la toma de decisiones políticas, escuchar las demandas de la sociedad y buscar alianzas basadas en la confianza y la reciprocidad. Además, es fundamental fomentar la participación de grupos históricamente excluidos, como la juventud, las mujeres y los pueblos indígenas, aceptando la realidad, necesidades y reivindicaciones de cada grupo, así como despojándose de prácticas y pensamientos ortodoxos, machistas, racistas e intelectualizadas.

4. Comunicación efectiva y construcción de narrativas

Desarrollar habilidades de comunicación efectiva para transmitir sus propuestas políticas de manera clara y convincente, priorizando las plataformas multimedia. Construir narrativas que resuenen con

las aspiraciones de la ciudadanía, destacando cómo la justicia social, la igualdad y la lucha contra la corrupción impactan positivamente en el diario vivir de las personas y, por lo tanto, resaltando también la necesidad de organización en todos los espacios posibles para luchar por la defensa de los derechos. La comunicación debe ser inclusiva y utilizar diferentes plataformas y estrategias para llegar a diversos segmentos de la sociedad.

5. Fortalecimiento institucional y ética política

Los partidos de izquierda deberían priorizar la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de sus estructuras internas. Esto implica adoptar prácticas de gestión política que sean éticas y res-

ponsables, así como promover mecanismos internos de control y sanción para prevenir la corrupción y garantizar la coherencia entre el discurso y la práctica política.

Los desafíos de la izquierda para cambiar la historia del país son inmensos. Mediante la claridad ideológica, la madurez y la planificación estratégica se pueden generar condiciones objetivas para crear un frente unido y sólido contra la derecha corrupta, así como para avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa. La consolidación de estas alianzas y el compromiso con la ética política serán fundamentales para lograr un cambio transformador en Guatemala. •